

ÍNDICE AI: AFR/62/07/97/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00:01 HORAS GMT DEL 20 DE FEBRERO DE 1997

ZAIRE: LAS TROPAS GUBERNAMENTALES SIGUEN COMETIENDO GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Los soldados zaireños que se retiran de la región de Kivu han cometido pillajes, violaciones sexuales y homicidios con una impunidad prácticamente total durante los últimos meses, y los habitantes de numerosas localidades y aldeas viven en un constante temor a convertirse en las próximas víctimas de estas violaciones de derechos humanos, según ha declarado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

Los temores han ido en aumento durante el último mes, cuando el gobierno lanzó una contraofensiva militar para recuperar el territorio perdido ante la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL).

Amnistía Internacional ha declarado: «Ante el incremento de los testimonios de violaciones de derechos humanos y el recrudecimiento de las actividades militares, pedimos a la comunidad internacional que presione al gobierno de Zaire para que ponga ya fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad».

Desde el éxodo masivo de refugiados que tuvo lugar a fines del año pasado, la situación de los derechos humanos en Zaire ha desaparecido del orden del día internacional. Los demás gobiernos parecen no querer o no poder emprender acciones para ayudar a las personas que sufren graves abusos contra los derechos humanos en Zaire, y los planes de enviar una fuerza de intervención humanitaria se han desvanecido tras la repatriación forzosa de los refugiados a Ruanda.

Las mujeres, los miembros de grupos religiosos y los ciudadanos de otros países, muchos de ellos procedentes de Ruanda o Burundi, se encuentran entre los grupos más atacados por las tropas zaireñas.

El 5 o el 6 de diciembre, según varias fuentes locales, los soldados de las Fuerzas Armadas Zaireñas (FAZ) violaron brutalmente a varias alumnas de la escuela secundaria Lycée Likovi, en Bunia. Al parecer, los soldados violaron a las niñas de forma salvaje y sistemática, y causaron la muerte a siete de ellas. En un incidente similar, un testigo declaró que unos soldados de las fuerzas armadas que habían ido a Bunia a fines de noviembre habían secuestrado y violado a varias jovencitas; este testigo afirmó: «esto ha convertido el disgusto que sentíamos por las FAZ en un odio encarnizado».

Los colaboradores de la iglesia también se han convertido en un blanco sistemático de ataques, pues las autoridades locales de Kisangani han acusado a la iglesia de colaborar con la rebelión. Los edificios eclesiásticos han sido registrados o saqueados repetidamente, y los miembros de la iglesia han sufrido hostigamientos e intimidaciones.

Desde que comenzó el conflicto en el este de Zaire, las autoridades zaireñas han detenido a refugiados y a ciudadanos de su propio país de origen tutsi, y también a periodistas y activistas de derechos humanos que han tratado de investigar los abusos contra los tutsis o se han pronunciado contra la política gubernamental en la zona del conflicto.

En Kisangani, capital de la región del Alto Zaire, al menos 80 presos de Ruanda y Burundi permanecían reclusos «por su propia seguridad» desde noviembre de 1996 en centros de detención dirigidos por el Servicio Nacional de Información y Protección (SNIP). Informes no confirmados indican que estos presos pueden haber sido trasladados a la lejana prisión de Osio, a 17 kilómetros de Kisangani, en donde las condiciones de reclusión son espantosas.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento directo al primer ministro de Zaire para que libere inmediatamente a estas personas a menos que las acusen de delitos tipificados en el código penal.

A principios de enero, el ministro de Defensa, el general Likulia Bolongo, anunció que las fuerzas armadas tenían que librarse de los «criminales, fugitivos, saqueadores y vagabundos» que se hallaban entre sus filas. Este anuncio llevó a la detención de decenas de soldados acusados de saqueo y desertión. El 21 de enero, 14 soldados fueron condenados a muerte por una corte marcial en Kisangani.

La organización considera que la pena de muerte es una violación inhumana del derecho fundamental a la vida, y por lo tanto ha pedido al gobierno de Zaire que conmute estas sentencias de muerte.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Zaire que garantice que sus fuerzas respetan los derechos humanos de los civiles desarmados -incluidos los desplazados y los refugiados- tanto en las zonas de conflicto como en el resto del país. La organización pide además tanto al gobierno de Zaire como a la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire que permitan el pleno acceso a los territorios bajo su control a los activistas de derechos humanos y a otras personas que estén investigando los informes sobre violaciones de derechos humanos en Zaire.

La organización ha declarado: «Los gobiernos de todo el mundo deben además evitar nuevas transferencias de armas ligeras y equipo militar asociado, así como de personal militar, a las fuerzas gubernamentales y a los grupos armados de la región».